
*La crisis del sistema político mexicano: mediaciones democráticas y redes imaginarias**

Roger Bartra**



En estos tiempos desencantados, cuando se desconfía tanto de los paradigmas científicos y filosóficos, todo intento por descubrir reglas y tendencias en las estructuras sociales y políticas puede parecer una anticuada conjura romántica. Sin embargo, me atrevo a defender la idea de que las ciencias sociales no están irremisiblemente hundidas en la esterilidad: creo que es posible hallar procesos profundos, explicarlos y, hasta cierto punto, prever algunas situaciones. Para defender esta idea, paradójicamente, usaré una imagen que no procede del método científico sino que viene del universo de las aventuras políticas y de las intrigas literarias: la conspiración. De manera paradójica también, invocaré los avatares de algunas experiencias personales que, directa o indirectamente, me han sumergido en las corrientes conspiradoras de la vida política y social.

Hace muchos años, en 1973, tuve un áspero debate con Fernando Henrique Cardoso, hoy presidente de Brasil y en aquel entonces el más célebre sociólogo de América Latina. Desencantado de su propia “teoría de la dependencia”, Cardoso explicaba que, a fin de cuentas, los horrores del atraso, la dictadura y el autoritarismo en Brasil y en México podían ser vistos como una “revolución burguesa de los países dependientes”: una apertura social que siendo falsa y controlada desde arriba estaba, sin embargo, marcada por un dinamismo dirigido. Cardoso expuso su cauteloso optimismo en un seminario sobre clases sociales y crisis política en América Latina reunido en la ciudad de Oaxaca en junio de 1973.¹ En esa época Brasil sufría aún los efectos del golpe militar de 1964 y México vivía una tímida apertura del sistema político autoritario.

En mi crítica a Cardoso, expliqué que donde él veía una “revolución burguesa” yo encontraba el embrión de una crisis política. Mis investigaciones en México me habían convencido de que los aparatos de mediación en que basaba su legitimidad el sistema político mexicano ya no funcionaban bien. “Todo esto hace pensar —fue mi conclusión— que los próximos años contemplarán el fin del famoso ‘sistema mexicano’ tal como ha venido funcionando desde 1940, con lo cual no estoy profetizando ni la inminente revolución socialista ni un próximo golpe de Estado”.² Aunque mi “profecía” sobre el fin del sistema mexicano se cumplió, debo admitir que mi análisis crítico estaba teñido de propósitos conspiradores, que eran delatados por el uso reiterativo de referencias a la lucha de clases, la hegemonía burguesa y los modos de producción, expresiones en las cuales Cardoso vio una expresión del “formalismo escolástico marxista” que bañaba al seminario de Oaxaca. Yo estaba convencido de que las “fuerzas populares” de alguna manera aprovecharían la crisis para fortalecerse y después, algún día, alentar una revolución que abriría las puertas al socialismo. Pero se trataba del optimismo forzado y ritual que debía manifestar en aquella época todo militante radical de la izquierda marxista. En realidad mis estudios sobre la sociedad rural me habían llenado de pesimismo, al hacerme comprender que el sistema mexi-

* Conferencia en la Casa ITESO-Clavigero, Guadalajara, 16 de mayo de 2001.

** Doctor en sociología por la Sorbona de París. Autor de *La democracia ausente: el pasado de una ilusión* (2000); *La sangre y la tinta* (1999) y *La jaula de la melancolía* (1987), entre otras obras.

cano tenía una sólida base en muy complejos resortes de mediación política. El gobierno de la “revolución institucionalizada” apoyaba su legitimidad en una extraña gestación de formas no capitalistas de organización: una serie de reformas y refuncionalizaciones estimulaba la expansión de “terceras fuerzas”, rurales y urbanas, que formaban la sólida base del régimen autoritario.

En suma, como lo desarrollé en un texto aún más pesimista, bajo determinadas condiciones podía surgir un “poder despótico moderno” (Mario Vargas Llosa lo llamó “dictadura perfecta”) que no era un régimen fascista ni un poder represivo de excepción, sino un gobierno estable basado en un aparato mediador no democrático capaz de proteger al proceso económico de las peligrosas sacudidas de una sociedad que alberga todavía contradicciones de naturaleza no específicamente capitalista.³ En estas condiciones, tanto la democracia como el socialismo son alternativas raramente transitadas; en cambio, es frecuente observar una verdadera “putrefacción de la sociedad”, para usar una rancia metáfora de Lenin, que muestra una privatización del estado y una estatización de la sociedad: el estado se despolitiza convirtiéndose en un cascarón tecnocrático y la sociedad civil se militariza ejerciendo contra sí misma la represión.⁴

Creí descubrir en el poder despótico moderno, tal como funcionaba en México, algunas claves para comprender las formas en que se legitimaba el poder en las avanzadas y ricas sociedades supuestamente “unidimensionales”, según la engañosa expresión de Marcuse. Una nueva situación política, posthegeliana, abolía los mitos del estado político y la sociedad civil e inauguraba un proceso de desplazamiento de los conflictos sociales. La nueva mitología —y aquí es donde entra la idea de conspiración— dibujaba a una cómoda sociedad estatizada y burocratizada, apenas perturbada por lejanas conjuras de guerrilleros, *hippies*, locos, comunistas o sectas religiosas.⁵

Ciertamente, el sistema mexicano, desde 1968, había iniciado un lento y desesperante proceso de putrefacción: una lenta transición que condujo, al menos, a tres momentos críticos muy tensos en 1982, 1988 y 1994. Todavía estoy asombrado de que la cultura izquierdista de los años sesenta y setenta, a pesar de la agobiante influencia del dogmatismo, haya logrado que en su seno crecieran las visiones críticas flexibles e imaginativas que permitieron enfrentar el difícil periodo que se inició en 1982. Ello se logró gracias a que el florecimiento del marxismo fue acompañado por nuevos movimientos inspirados por la revolución sexual, el *rock*, los viajes psicodélicos, el feminismo, la Primavera de Praga, la revuelta estudiantil, el existencialismo y la nueva psiquiatría. Después de muchos años de escudriñar las estructuras de mediación política, sobre todo en zonas agrarias, me pareció entender que estaban cruzadas o permeadas por los movimientos que le imprimieron su carácter a los años sesenta. En las estructuras legitimadoras no sólo había campesinos bonapartistas y caciques populistas; al observar su funcionamiento tanto en América Latina como en Europa, comprobé que en ellas había también las imágenes de una variopinta fauna marginal de indígenas, terroristas, enfermos, criminales y otros desclasados que conducían casi siempre una guerra más ilusoria que real contra la mayoría silenciosa de ciudadanos respetuosos del *statu quo*. El resultado de estas observaciones fue publicado en 1981 en mi libro *Las redes imaginarias del poder político*.⁶

La noción de *red imaginaria* continúa, amplía y modifica el concepto de *estructura de mediación*. Yo le doy mucha importancia a estos conceptos porque me parece que permiten ubicar con precisión un ámbito social revelador de las condiciones en que se reproducen y legitiman los aparatos políticos. Las peculiaridades de estos procesos mediadores —y el grado de eficiencia con que funcionan— son como un barómetro que revela las presiones a las que está sometido el sistema político. En el México rural posrevolucionario creció una compleja estructura de mediación que constaba esencialmente de dos partes:

La noción de *red imaginaria* continúa, amplía y modifica el concepto de *estructura de mediación*. Yo le doy mucha importancia a estos conceptos porque me parece que permiten ubicar con precisión un ámbito social revelador de las condiciones en que se reproducen y legitiman los aparatos políticos. Las peculiaridades de estos procesos mediadores —y el grado de eficiencia con que funcionan— son como un barómetro que revela las presiones a las que está sometido el sistema político. En el México rural posrevolucionario creció una compleja estructura de mediación que constaba esencialmente de dos partes:

- Una economía campesina refuncionalizada que, gracias a los repartos agrarios, se extendía como una forma de controlar el desbocado crecimiento del capitalismo moderno en el campo.
- Una serie de instituciones, organizaciones y cacicazgos de carácter populista y supuestamente revolucionario que controlaban las expresiones más crudas y directas del ejercicio del poder político.

En el seno de esta estructura de mediación se podían observar señales de endurecimiento: las instancias caciquiles y populistas eran paulatinamente invadidas por intereses económicos y financieros que las fueron transformando en expresiones cada vez más autoritarias, represivas y corruptas. Al



Un instante, óleo sobre tela, 130.5 x 95 cm, 1976, colección particular, cortesía Galería Arvíl.

mismo tiempo, la economía campesina iba siendo estrangulada por la modernización. Estas interpretaciones generaron muchos debates, pues destacaban hechos incómodos. Descubrían que el campesinado, lejos de ser fuente de avances y progreso, se había convertido en una pieza clave del estancamiento y del autoritarismo. Esta idea irritó a muchos estudiosos empapados de concepciones populistas de diverso signo político, desde la ortodoxia maoísta hasta el nacionalismo revolucionario.

Mi conclusión, en el estudio publicado en 1974, fue que las estructuras agrarias de mediación eran en gran medida responsables de la famosa estabilidad del sistema político. Sin embargo, al estrecharse día con día su juego dialéctico interno, se podía prever, como lo escribí, “el fin del actual sistema político mexicano”.⁷

Quiero destacar un aspecto que me parece sustancial: las estructuras de mediación son un ámbito político legitimador que funciona indepen-

dientemente de la formalidad democrática, aunque tienen una base “popular” sólida y estable formada por un amplio aunque marginal segmento social. Podemos comprender que si los mecanismos y procesos de mediación se descomponen, la legitimidad de todo el sistema resulta seriamente afectada.

Sin embargo, la idea de una estructura de mediación en crisis tenía algunas limitaciones importantes, entre las cuales cabe destacar que no reflejaba la importancia de las formas culturales simbólicas e imaginarias de la legitimación política. Por eso fue necesario ampliar la perspectiva de las mediaciones, para contemplar el conjunto de las redes imaginarias del poder político. En estas redes ya no sólo hallamos al campesino cada vez más ilusorio creado por el nacionalismo populista, sino diversos actores, en realidad toda una compañía de teatro que escenifica una guerra en gran parte imaginaria. Los actores imaginarios del drama son

los llamados “marginales”, una aglomeración simbólica que corresponde muy vaga y lejanamente a los grupos sociales reales que, más que marginados, viven materialmente aplastados bajo el peso de la miseria y la represión.

Quiero mencionar aquí otra discusión relacionada con estas ideas que resultó muy estimulante. Así como la presencia de actores campesinos en el teatro imaginario ha causado inquietudes y críticas, el hecho de que la cultura mediadora coloque en un mismo escenario a indígenas o minorías sexuales junto a terroristas y criminales, también ha generado incomodidades. En una mesa redonda efectuada en 1980, Luis Villoro, con sus inteligentes observaciones, me permitió entender nuevos aspectos del problema.⁸ En la misma discusión, Carlos Monsiváis también puso objeciones a la asimilación de “marginales” dañinos (criminales, terroristas) y benignos (indígenas, homosexuales). En contraste, a Octavio Paz le gustó mi distinción entre verdaderos marginales y “la marginalidad creada por el poder”.⁹

La discusión con Monsiváis, Paz y Villoro me estimuló a buscar la forma en que en el México finisecular se manifestaban las redes imaginarias del poder político. Estaba convencido de que, al examinar la manera en que se tejían estas redes, podría mostrar los límites del sistema político. Pero debo confesar que no me impulsaba un interés meramente científico: había también una intención conspiradora para seguir usando la imagen que era alentada por un compromiso político con las luchas democráticas. De este impulso político salieron los ensayos que acabaron reunidos en un libro que lleva un título sintomático: *La democracia ausente*.¹⁰ Pero aquí quiero destacar el proceso que motivó la mutación conceptual de las *estructuras* (de mediación) en *redes* (imaginarias), para acabar finalmente en una *jaula*. Estructuras, redes, jaulas: conceptos emparentados cuya secuencia expresa metafóricamente el gran problema: ¿cómo entender primero y escapar después del *orden* autoritario, de las *trampas* ideológicas o de las *prisiones* políticas? Mi respuesta cristalizó en las investigaciones cuyos resultados publiqué en el libro *La jaula de la melancolía*, de 1987. El diagnóstico no era optimista: las redes mediadoras, estrechamente ligadas a la identidad nacional, se hallaban dañadas y, por lo tanto, el sistema estaba condenado a perecer. Trece años después tuve la engañosa pero agradable ilusión de que mi pequeña aportación conspiradora se había unido a un am-

plio coro para lograr la caída del sistema autoritario.

Con este recorrido por mis investigaciones sobre las estructuras políticas he querido presentar e introducir el problema del futuro de la democracia en México, así como documentar mi confianza en que la reflexión antropológica y sociológica, cuando intenta develar el futuro de los procesos políticos, no es un ejercicio estéril. Me he limitado a hacer un esbozo muy apretado. Quienes estén interesados en los detalles de mi recorrido deberán consultar las obras que he citado. La pregunta que quiero confrontar ahora es la siguiente: ¿es posible prever la forma que adoptarán las mediaciones legitimadoras bajo las nuevas condiciones democráticas que se abrieron en el año 2000?

Me gustaría iniciar la reflexión dando, en cierta forma, un paso atrás. A la manera en que le hubiera gustado a Niklas Luhmann, intentemos imaginar si el nuevo y democrático sistema político mexicano podría funcionar y reproducirse sin derivar su legitimidad de la sociedad que lo rodea, salvo por el funcionamiento de sus propios mecanismos electorales, y cimentar su cohesión sin acudir a estructuras normativas externas. Se trataría de un sistema autolegitimado, autónomo y basado en la racionalidad y la formalidad de la administración, así como en su capacidad de generar las condiciones políticas del bienestar. Bajo estos supuestos, el sistema político ya no requeriría de mediaciones ni, por lo tanto, de fuentes extrasistémicas de legitimidad. Para continuar en el ámbito de la termodinámica de los sistemas abiertos, tendríamos una actividad gubernamental estructurada de tal forma que lograría no sólo dominar sino además reducir la complejidad del medio ambiente social circundante en la medida en que aumentase la complejidad de la acción política. Es decir: uniformidad caótica —entropía— en la sociedad y orden sistémico en el gobierno.

Éste es, sin duda, el sueño de muchos administradores y tecnócratas, que desearían tener la libertad de gestión suficiente para intentar, sobre la base de la calidad y la racionalidad, que la gestión política vuele por su propio impulso, sin necesidad de recurrir a estructuras ideológicas o mediaciones sociales. En este sueño, en caso de existir déficit de racionalidad y eficiencia, el propio sistema lograría curar las heridas con medidas de carácter administrativo.

Esta utopía sistémica nos permite determinar rápidamente varios puntos estratégicos. Para comenzar, la gestión gubernamental debe operar sobre la base de una nueva cultura que sustituya al nacionalismo revolucionario del PRI. Se ha hablado de una cultura gerencial, cuya estructura simbólica debería tener la capacidad de articular la identidad del sistema político. No cabe duda de que, a escala mundial, se han acumulado muchas experiencias que alimentan la cultura gubernamental, enriquecida además por la transferencia de hábitos y prácticas procedentes del mundo empresarial. Desde luego, no quiero detenerme en detalles técnicos sino preguntar: ¿es suficiente una cultura gerencial para dotar de legitimidad a un sistema político democrático? No lo creo, ni siquiera en el dudoso caso de que una cultura semejante trajese el bienestar económico para las amplias capas de la población más desposeída. La economía, por sí sola, no produce legitimidad.

La hegemonía de una cultura gerencial presupone que el sistema político mexicano, desde las elecciones del año 2000 en que pierde el PRI, ya no necesitaría —como he dicho— fuentes externas de legitimidad: la misma eficiencia de los aparatos de gobierno debería ser una base suficiente para garantizar su continuidad. Pero, como todos sabemos y es obvio, los aparatos gubernamentales en México están muy lejos de esa eficiencia gerencial y están demasiado contaminados por formas corruptas, paternalistas o corporativas de gestión como para funcionar alimentados únicamente por una nueva cultura gerencial y mercadotécnica. Es curioso que haya sido la oposición de izquierda la que transmitió primero la imagen de un grupo de políticos, encabezados por Vicente Fox, que habría ganado las elecciones del 2000 gracias a sus habilidades mercadotécnicas y gerenciales en el manejo de la publicidad política, con lo que habría logrado engañar a millones de electores. El nuevo gobierno estaría ahora intentando trasladar su destreza gerencial a la administración pública.

Ésta es una explicación simplista que no permite comprender que la derrota del PRI está inscrita en un complejo proceso de transición democrática. Yo distingo dos ciclos de la transición: el ciclo corto y el ciclo largo.¹¹ El ciclo corto se inició con la crisis política de 1988, se extendió hasta las grandes tensiones de 1994 y finalizó con las elecciones del año 2000. Durante este periodo se produjo la transición política a un sistema democrático. Pero las causas profundas de la transición, que

implican una gran crisis cultural, se inscriben en un ciclo largo que se inició en 1968 y todavía no termina. Este ciclo largo contempla la crisis de las mediaciones políticas nacionalistas y el lento crecimiento de una nueva cultura política. Es precisamente en este ciclo de largo alcance en donde podemos encontrar las señales de las nuevas formas de legitimidad. En los cambios y ajustes que el propio sistema en crisis propició podemos reconocer algunas indicaciones. Por ejemplo, ante la crisis del nacionalismo el gobierno priista optó por impulsar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la entrada del país a la globalización, y después, ante los problemas de credibilidad, impulsó una reforma política que instauró un mecanismo electoral autónomo y confiable. Con estas medidas, el gobierno priista aceleró su fin, aunque su objetivo fuera todo lo contrario: alargar su permanencia en el poder. La oposición de izquierda hizo una mala lectura de estas situaciones: creyó necesario volver al nacionalismo revolucionario original (cardenista e incluso zapatista) y desarrolló una actitud populista de desconfianza ante la democracia electoral. El sector modernizante del PRI también hizo una lectura equívoca: creyó que los sectores tecnocráticos del gobierno, empapados de una nueva cultura eficientista y gerencial, habían logrado la legitimidad suficiente para ganar las elecciones de 2000. Se equivocaron, y su candidato perdió la contienda. Este desenlace es también una señal de advertencia a los nuevos gobernantes foxistas: sus habilidades empresariales, su talante tecnocrático y su inspiración gerencial —útiles sin duda en las tareas cotidianas de la administración— no serán suficientes para garantizar una nueva legitimidad. El nuevo régimen democrático necesitará echar raíces en los mismos procesos de largo plazo que impulsaron la caída del sistema autoritario. Lo que no sabemos es si el gobierno de Vicente Fox será capaz de auspiciar este profundo proceso de cambio o se contentará con una gestión hábil y decorosa que, en el mejor de los casos, impida la quiebra del país. La historia reciente de otros países latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela) nos indica que no estamos a salvo del peligro de naufragio. Así, el ángel de la historia le agradecería al gobierno de Fox haberse convertido en una eficiente agencia de pompas fúnebres encargada de enterrar el sistema autoritario, pero no lo contemplaría como un gran reformador que hubiese abierto las puertas de una nueva civilidad política y de una

cultura política avanzada. Hay algunas señales inquietantes que indican que el gobierno de Fox podría contraponerse al curso profundo de la transición, contribuyendo con ello a frenar un ciclo que de por sí es lento. En todo caso, creo que no será posible —ni sería benéfica— una amalgama entre los mecanismos que el gobierno de Fox pueda usar para mantener e incluso ampliar el apoyo popular y los procesos de gestación de una nueva cultura civil y democrática. Pero una contraposición entre el gobierno y la nueva cultura cívica emergente sería dramática y desastrosa.

Independientemente de los recursos publicitarios del nuevo gobierno, se espera que el grupo gobernante comprenda que es necesaria una reforma del estado mexicano. Tanto la llamada globalización como la reforma electoral democrática (y sus consecuencias, el TLCAN y la derrota del PRI) han mostrado que México avanza por un camino que se dirige hacia la descentralización, la federalización y la parlamentarización. Este proceso nos enfrenta a un problema: las tendencias políticas actuales han roto los esquemas. Las fronteras y los ejes que definían y clasificaban la actividad estatal se han quebrado o trastocado.¹² Una de sus manifestaciones más espectaculares puede verse en el hecho de que las funciones de los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) se ven ampliamente trastornadas y rebasadas por las funciones de un cuarto poder que no respeta fronteras: *el poder legitimador* que garantiza la gobernabilidad.

El poder estatal se legitima no sólo por un ejecutivo eficiente, un parlamento representativo y una vigilancia justa. Se legitima principalmente por procesos culturales, educativos, morales e informativos que constituyen redes de vasos comunicantes que no respetan las fronteras tradicionales, ni las que dividen a los tres poderes, ni las de carácter territorial (sean electorales, estatales, nacionales, etc.), ni las que separan los órdenes jerárquicos. Estas redes tienden a establecer nuevas y diversas formas relativamente autónomas de poder ciudadano.

Se trata de redes extraterritoriales, metademocráticas, transnacionales, globales o incluso posnacionales. A primera vista, estas redes culturales abarcan un conjunto extremadamente heterogéneo: medios masivos de comunicación (prensa, radio, televisión, Internet); escuelas y universidades; grupos étnicos, religiosos, sexuales; editoriales y hospitales; organizaciones no gubernamentales, iglesias, sectas y grupos marginales con vocaciones

diversas (desde actividades paranormales hasta acciones paramilitares, desde pacifistas vegetarianos hasta dogmáticos terroristas).

Se trata de un nuevo espacio de poder más atravesado por los flujos culturales y simbólicos que por el intercambio de bienes materiales: un espacio legítimo, generador de legitimidad, pero poco y mal legislado, impulsado por una economía emergente que se basa más en la producción y circulación de ideas y menos en la de objetos, más en el *software* que en el *hardware*.

Así pues, y puesto que la descentralización, la federalización o la parlamentarización del estado mexicano, en el marco de la división de poderes, dejan sin solución importantes problemas de carácter general y nacional, estrechamente ligados a la gobernabilidad, será cada vez más necesario legislar en el ámbito constitucional la existencia de áreas de gestión con un alto grado de autonomía con respecto a los tres poderes, así como en su relación con los espacios municipal, estatal y federal.

Estas áreas autónomas de gestión podrían constituirse como consejos, comisiones o institutos encargados de regir a escala nacional espacios tales como la cultura, la educación superior, las autonomías indígenas, las iglesias, los medios de comunicación, los procesos electorales e incluso ciertas instancias de la recaudación fiscal. Su constitución implica el acercamiento de algunas instancias del poder estatal a la sociedad civil: es, en cierta forma, una “estatización” de la sociedad civil, pero también una “civilización” de la gestión estatal.

Como quiera que ocurran estas reformas en los aparatos estatales, se irán acumulando a lo largo de un proceso de cambios que insertará paulatinamente a México en una red global de países democráticos dotados de economías en expansión. Como puede verse, establezco un vínculo entre, por una parte, la gestación regulada de áreas de autonomía y, por otra, la inserción profunda de México en la llamada globalización, esa economía neocapitalista —impulsada por una gran revolución tecnológica— que se está expandiendo a escala mundial desde el norte de América y desde la Unión Europea. Soy perfectamente consciente de que la inserción en este proceso de países atrasados y con resabios autoritarios es sumamente difícil. Pero no es imposible. La experiencia de países como España, Grecia o Portugal puede ser iluminadora tanto de las dificultades como de las ventajas de esta entrada en la globalidad neocapita-

lista. Si agregamos a nuestra reflexión las experiencias de algunos países asiáticos (como Corea o Indonesia), no cabe duda que nuestro optimismo se enfriará. Y aun así, dadas las coordenadas geopolíticas que definen a México, no veo ninguna opción mejor en este momento. Además, me parece que se trata de un proceso previsible que se encuentra inscrito en el ciclo largo de transición al que hice referencia. El problema, para los sectores más avanzados, es lograr que la acumulación y circulación de riqueza pague un tributo elevado, en dinero y en reformas, para contribuir a la generalización del bienestar. Pero no me detendré ahora en la consideración de este problema.

La expansión de áreas de gestión autónoma y democrática tiende a ligarse a otro fenómeno: el paulatino surgimiento de una condición posnacional. La erosión del nacionalismo y su crisis como mecanismo legitimador no es una invitación a impulsar, como remplazo, a un nuevo nacionalismo: es más bien una señal de que iniciamos una época en que los resortes de la gobernabilidad no se encuentran en la exaltación ideológica de valores nacionales. Es comprensible que esta situación haya alarmado a la izquierda democrática: en cierta medida estamos presenciando el derrumbe de los viejos paradigmas progresistas y el surgimiento de amenazas renovadas. Pero la izquierda ha enfrentado los nuevos procesos con una actitud conservadora y estrecha: sólo ve las amenazas de la privatización y de la dependencia con respecto a las redes globales, pero no comprende que es importante impulsar otros aspectos del proceso, como la ampliación de las autonomías democráticas y el combate de la corrupción (empresarial, burocrática o la ligada al narcotráfico y al crimen organizado).

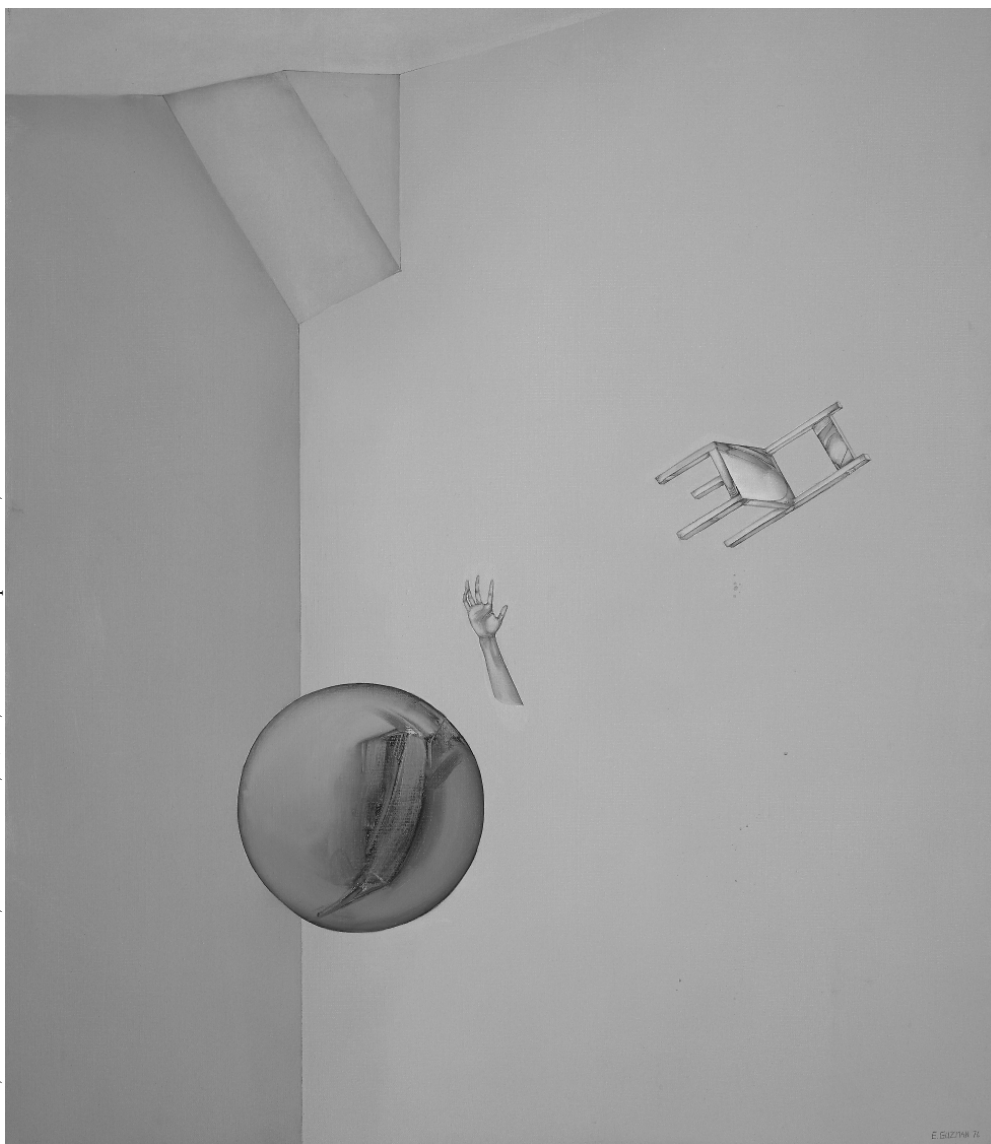
La vieja izquierda aún tiene reacciones conservadoras ante estos cambios y adopta actitudes “globalifóbicas” en lugar de analizar críticamente el proceso para descubrir aquellas facetas cuyo impulso puede auspiciar una elevación general del nivel y la calidad de la vida. Nos enfrentamos a una situación compleja y dramática: comprobamos que el desarrollo capitalista no conlleva necesariamente —como se creía y como todavía algunos creen— una pauperización material de la población pero sí abre nuevos espacios que contribuyen al empobrecimiento cultural y espiritual de la sociedad.

Éste es un problema espinoso y complicado. La pauperización cultural no es, como se creía en

los sesenta, una uniformización mundial para adaptar a la población a un mercado único, de acuerdo con modelos gestados por las sociedades de consumo altamente industrializadas. Las grandes amenazas no provienen de la circulación global de mercancías, ideas, valores y símbolos culturales sino de otro proceso que acompaña a la globalización como su sombra: el fortalecimiento de poderes locales que en muchos casos recuperan tradiciones culturales parroquiales empapadas de costumbres religiosas y fanatismos étnicos, intereses caciquiles o corporativos. No me refiero solamente a los poderes regionales que surgen gracias a la descentralización o a la federalización sino también a aquellas fuerzas que se aprovechan de la desregulación y autonomía de lo que he llamado el cuarto poder (o los poderes culturales, sobre todo en los medios masivos de comunicación, en la educación y en las instituciones religiosas) para impulsar no los símbolos globalizadores del neoliberalismo y del mercado mundial sino una extraña mezcla de rancios valores conservadores con la agresividad soez de los nuevos ricos. Un cóctel de globalización y parroquialismo nos lo ofrecen cotidianamente muchas declaraciones de los jefes de la iglesia, lo mismo que numerosos programas radiofónicos y televisivos. Un ejemplo extremo pero revelador es la cultura del narcotráfico, combinación de catolicismo parroquial con crueles y desenfrenados apetitos de riqueza, de cursilería ranchera con negocios transnacionales. Otro ejemplo: cuando ciertas costumbres parroquiales se transforman en reglas sancionadas legalmente en municipios o estados se corre el riesgo de consagrar formas de gobierno integristas, sexistas, discriminatorias, religiosas, corporativas o autoritarias; el ejemplo de Guanajuato el año pasado fue dramático: los usos y costumbres referidos al tabú del aborto, fundado en creencias religiosas, al ser transformados en ordenamientos legales en un estado crearon una espectacular confrontación a escala nacional. Los problemas locales se convirtieron en nacionales, y por ello el gobernador tuvo que vetar los preceptos legales votados por los diputados de Guanajuato.

He enfatizado los problemas culturales no sólo porque mi oficio de antropólogo me lleva a ello sino, además, porque estoy convencido de que el

Caiída, óleo sobre tela, 85 x 65 cm, 1976, colección particular, cortesía Galería Arvil.



futuro de la democracia en México está estrechamente vinculado a las maneras en que la cultura política generalizará nuevas legitimidades. He señalado también algunas reformas que podrían regular los nuevos procesos culturales. Pero, para terminar, quisiera enfrentar otra pregunta: ¿qué procesos culturales se instrumentarán realmente en los próximos años? Como no soy tan optimista como para creer que el nuevo gobierno impulsará decididamente un amplio proceso de reformas, ni como para pensar que en la sociedad mexicana no hay fuerzas poderosas que intentarán bloquear los cambios aun antes de que puedan siquiera proponerse formalmente, me veo en la necesidad de suponer que enfrentaremos un periodo de turbulencia política. Aunque puede haber sorpresas, hay

indicios de que la misma turbulencia proporcionará elementos estabilizadores que podrían fortalecer la cohesión de las fuerzas democráticas e incrementar la eficacia del sistema democrático. Sintomáticamente, se trata de elementos extrasistémicos generados por las tensiones a que se encuentran sometidas las viejas estructuras y las antiguas ideologías, así como por las tendencias a la acumulación salvaje de capital. Estos elementos extrasistémicos configuran lo que se podría llamar una franja de marginalidad hiperactiva, compuesta por segmentos del PRI en descomposición, guerrillas virtuales y guerrillas reales, crimen organizado y cárteles de narcotraficantes, movimientos de protesta urbana y suburbana, y diversos grupos paramilitares o terroristas. No se trata de un fenó-

meno desconocido: en realidad desde 1994 —con el alzamiento zapatista y los espectaculares asesinatos políticos— la sociedad mexicana comenzó a experimentar los típicos procesos de cohesión y contracción que, si no rebasan umbrales críticos, proporcionan cierta legitimidad a la actividad gubernamental.

En mi opinión, podemos observar cierta fragilidad en esta peculiar dialéctica espectacular entre marginalidad hiperactiva y la correspondiente cohesión de las fuerzas que intentan estabilizar una normatividad democrática en torno del nuevo gobierno. Es cierto que este proceso implica la legalización (o al menos la legitimación) de una gran pluralidad de expresiones políticas, étnicas, sexuales o religiosas, lo cual es un fenómeno enriquecedor. Sin embargo, también entroniza costumbres asociadas a la violencia, la corrupción y las formas ilegales de protesta, que más vale evitar que se generalicen. Estas costumbres son como las drogas: su uso puede llegar a generar dependencia. Ello fortalece sólo la estabilidad de formas de consenso aglutinador logradas más por el miedo que por el convencimiento cívico. Al mismo tiempo, estos procesos frenan la consolidación de un sistema democrático y republicano de partidos políticos modernos, un sistema sin el cual es casi imposible pensar en una nueva legitimidad democrática cuya pluralidad abra las puertas de la imaginación social y de la creatividad política.

Ahora, en el primer año del milenio, estamos inmersos de lleno en este proceso. La marcha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) fue el primer acto del gran teatro político. El espectáculo continuó en un segundo acto, durante el cual senadores y diputados discutieron el proyecto de reformas sobre derechos y cultura indígena y aprobaron modificaciones a la Constitución. Los legisladores decidieron no vincular el ejercicio de la autonomía de los pueblos indígenas a un ámbito territorial, con lo cual evadieron la implantación de una variante mexicana de las reservaciones indias de Estados Unidos. Con ello evitaron una de las dimensiones más conservadoras de los acuerdos de San Andrés pero provocaron la indignación del EZLN.¹³ La situación, por lo tanto, es inestable. La manera en que se desarrolle la continuación del proceso nos dará indicios sobre qué camino seguirá la democracia en México. Tengo la esperanza de que los siguientes actos disipen tanto las tentaciones guerrilleras y provincianas de la izquierda como la influencia de hábitos gerenciales

y parroquiales en el gobierno foxista y permitan a los actores políticos mirar más allá de la conservación de sus intereses y del aprovechamiento oportunista de las ventajas coyunturales. Espero que las conspiraciones marginales y sectarias confluyan en la gran conjura democrática en la que muchísimos ciudadanos estamos comprometidos. ♦

Notas

1. Cardoso, Fernando Henrique. "Las clases sociales y la crisis política en América Latina", en Benítez Centeno, Raúl (ed.), *Clases sociales y crisis política en América Latina*, Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM, Siglo XXI, México, 1977.
2. Bartra, Roger. "Clases sociales y crisis política en México", en Benítez Centeno, Raúl (ed.), *op. cit.*
3. Bartra, Roger. *El poder despótico burgués. Las raíces campesinas de las estructuras políticas de mediación*, Península, Barcelona, 1977, p.118.
4. Expresé algunas de estas ideas en un segundo texto que continuaba la discusión con Cardoso. Aunque los materiales de esta segunda ronda fueron publicados, el mío fue extrañamente excluido por el editor y no apareció en el libro. La contestación de Cardoso a mis críticas, en cambio, sí fue publicada: tuvo el mal gusto de terminar insinuando que mis provocaciones son de las que llevan a los compañeros a Siberia. Pero lo único que se fue a Siberia fue mi texto de contestación, que quedó congelado tal vez bajo la sospecha de ser parte de alguna conspiración.
5. Bartra, Roger. *El poder despótico...*, *op.cit.*, pp.147-48.
6. Véase la edición corregida revisada y aumentada. Bartra, Roger. *Las redes imaginarias del poder político*, Océano, México, 1996.
7. Roger Bartra, *Estructura agraria y clases sociales en México*, Era, México, 1974, p.162.
8. Villoro, Luis. "Roger Bartra: estado y sociedad civil" [1980], en *México, entre libros*, El Colegio Nacional/Fondo de Cultura Económica, México, 1995.
9. Bartra, Roger. "Una discusión con Octavio Paz" [1980], *La Jornada Semanal*, núm.71, México, octubre de 1990.
10. Bartra, Roger. *La democracia ausente*, primera edición, Grijalbo, México, 1986; edición corregida, Océano, México, 2000.
11. Expresé por primera vez esta idea en una discusión con Jorge G. Castañeda (hoy canciller del gobierno de Vicente Fox) y Claudio Lomnitz (profesor de la Universidad de Chicago), organizada por la revista *Fractal* y publicada en su número 12 de 1999 bajo el extraño título de "La transición, esa metáfora calva".
12. A continuación resumo los argumentos y las propuestas que presenté en la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado, encabezada por Porfirio Muñoz Ledo y cuyas conclusiones aparentemente fueron aceptadas por Vicente Fox en noviembre de 2000, cuando estaba a punto de tomar posesión del cargo de presidente de la república.
13. Al respecto, véase el ensayo "Derechos indígenas: imagería política e ingeniería legislativa", en *Letras Libres*, núm. 29, mayo de 2001, y el libro *La sangre y la tinta: ensayos sobre la condición postmexicana*, Océano, México, 1999.